

PAZ Y SEGURIDAD

LA LÓGICA POLÍTICA DE LOS ASESINATOS DE LÍDERES SOCIALES: AUTORITARISMO COMPETITIVO LOCAL Y VIOLENCIA EN EL POSACUERDO

Juan Albarracín / Juan Pablo Milanese / Margarita Navarro

Inge Helena Valencia / Jonas Wolff

Noviembre 2020



La violencia ejercida contra líderes y lideresas sociales después del Acuerdo de paz no solo es el resultado de la presencia de grupos criminales y economías ilegales: sigue también una lógica política: actores políticos locales delegan en grupos armados ilegales el uso de la violencia contra rivales políticos y líderes sociales que amenazan con desarticular formas de autoritarismo competitivo local.



En este sentido, los asesinatos de líderes sociales son más probables en municipios donde hay menor participación electoral, mayor concentración de votos en pocos partidos y mayor fuerza electoral de la izquierda.

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	4
2	ORDEN SOCIAL Y POLÍTICO EN LAS PERIFERIAS	6
2.1	Grupos armados y orden social.....	7
2.2	Estado, autoritarismos competitivos locales y violencia contra líderes sociales en Colombia	8
3	PANORAMA NACIONAL	10
4	ÓRDENES SOCIALES LOCALES Y VIOLENCIA EN TRES REGIONES DEL PAÍS	14
4.1	Norte del Cauca: violencia, minería y ruptura de procesos sociales	14
4.2	Bajo Cauca antioqueño: entre la tradición paramilitar y las disputas mineras	17
4.3	Tumaco: extractivismos persistentes, narcotráfico y captación de rentas del Estado	18
5	REFLEXIONES FINALES	21
	REFERENCIAS	22

1

INTRODUCCIÓN

El alarmante número de líderes sociales asesinados en el posacuerdo –que continuó inclusive durante el aislamiento obligatorio resultante de la pandemia de la covid-19– ha generado la exigencia de líderes sociales, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y organizaciones internacionales al Estado de mecanismos de protección más efectivos. Evidentemente, parte fundamental de formular e implementar políticas que garanticen la vida y la actividad social y política de los líderes pasa por un diagnóstico sobre las causas de esta violencia.

Tanto el gobierno como los medios de comunicación han asociado la violencia contra líderes sociales con la presencia de economías ilegales y grupos armados no estatales en las periferias del país, es decir, este es un problema resultante de la presencia estatal precaria en la periferia. Los líderes sociales son un obstáculo para grupos criminales en su búsqueda de extraer rentas ilegales y controlar territorios estratégicos. Siguiendo este análisis, las propuestas de protección tienden a enfocarse en reforzar esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), fortalecer la presencia de la fuerza pública en regiones periféricas y debilitar las estructuras de grupos criminales.

Sin minimizar la importancia que tiene ofrecer esquemas de protección individual a líderes sociales, esta aproximación tiende a ignorar las causas políticas detrás de esta violencia. Pensar en los grupos armados no estatales solo como empresarios de la ilegalidad y su búsqueda de rentas ilícitas como la única razón de la violencia, desconoce cómo estos grupos son parte importante de la construcción de órdenes sociales y políticos de corte autoritario, en conjunto con élites locales. Como discutiremos en este análisis, el uso de la violencia contra los líderes sociales responde, al menos en parte, a esfuer-

zos de élites locales (políticos y grupos criminales, entre otros) por preservar formas de poder local que se ven amenazadas por la movilización de (nuevas) fuerzas políticas en el posacuerdo y la implementación de puntos del Acuerdo de paz. En este sentido, la protección efectiva de líderes sociales pasa por un apoyo estatal decidido a la implementación de los puntos de dicho Acuerdo –incluyendo las garantías para la participación política– y una reforma profunda del sistema político subnacional, que supone la desarticulación de redes de poder que conectan a políticos locales con grupos armados.

En esta segunda entrega discutimos más a fondo cómo la existencia de formas de autoritarismo competitivo local en las periferias colombianas está relacionada con la violencia contra líderes sociales¹. En la primera parte

1 Desde hace algunos meses, investigadores de la Universidad ICESI y del Peace Research Institute de Frankfurt indagan por las causas de esta violencia, de la mano del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) y la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol). En el marco de estos esfuerzos, los investigadores y Fescol adelantan un proyecto que consiste de cuatro informes para discutir diferentes aspectos de la violencia contra líderes sociales en el posacuerdo. En el primer documento (“Violencia y órdenes políticos locales en el posacuerdo: las dinámicas territoriales en el norte del Cauca, el bajo Cauca antioqueño y Tumaco”). Disponible en <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/16471.pdf> se caracterizó y analizó cómo se presentan estas dinámicas de violencia en el posacuerdo, dando una mirada multirregional para entender las dinámicas de violencia y economías ilegales en tres territorios periféricos-rurales: el municipio de Tumaco, el norte del departamento del Cauca y el bajo Cauca antioqueño. Posteriormente, en el tercer artículo se explorarán los patrones de participación política (en particular electoral) después del Acuerdo de paz. Por último, en el cuarto documento se presentarán algunas recomendaciones para fortalecer la construcción de paz y la protección de líderes y lideresas sociales en los territorios.

exploramos cómo grupos armados (criminales) son actores que contribuyen a la constitución de órdenes sociales y políticos en regiones periféricas, cooperando con élites políticas y, en ocasiones, con agentes del mismo Estado (central). Mostramos, a continuación, cómo la consolidación de autoritarismos competitivos locales en la periferia no es una novedad en Colombia y, lamentablemente, la coyuntura crítica del Acuerdo de paz y su implementación parece no haber sido aprovechada para

romper con este patrón histórico. En la tercera sección presentamos evidencia cuantitativa que asocia características de la política local con la violencia contra líderes sociales. Finalmente, en la cuarta volvemos a los casos introducidos en el primer análisis (bajo Cauca, norte del Cauca y Tumaco) para ilustrar cómo economías ilegales y formas de poder local se unen para crear contextos “propicios” para el uso de la violencia contra fuerzas sociales políticas alternativas en la periferia.

2

ORDEN SOCIAL Y POLÍTICO EN LAS PERIFERIAS

La violencia contra líderes sociales, cuando no ha sido minimizada o atribuida a motivos personales², es comúnmente asociada a las diversas manifestaciones de la ausencia o presencia precaria del Estado en regiones periféricas. En este sentido, es común escuchar por parte del gobierno nacional o en algunos medios de comunicación, la idea de que la existencia de mercados ilegales –como la minería ilegal o los cultivos de uso ilícito– y la concomitante presencia de grupos armados ilegales es la principal causa detrás de los asesinatos de líderes sociales. El presidente de la República, por ejemplo, ha asociado repetidamente la violencia contra líderes sociales con la existencia de rentas y grupos armados ilegales³. En este sentido, con frecuencia se apunta a los cultivos ilícitos y la minería ilegal, así como a la presencia de grupos armados ilegales, como factores de riesgo asociados al asesinato de líderes y lideresas sociales (Defensoría del Pueblo, 2017 y 2018).

A pesar de lo paradójico que resulta que altos representantes del Estado admitan que la violencia contra los líderes sociales se deriva de la incapacidad del Estado de proteger a sus ciudadanos en regiones periféricas, la asociación de estas muertes con fenómenos criminales sí busca –y esto se sostiene explícitamente por parte de actores estatales– señalar que no son el resultado de la acción “política” de esos líderes, es decir, que no ocurren por la movilización de estos actores por reivindicaciones políticas o sociales.

Si bien, como se verá en las siguientes secciones de este documento, las economías ilegales y la presencia de grupos armados no estatales son factores importantes para entender los asesinatos, las amenazas y los hostigamientos contra líderes sociales, reducir la explicación de esta violencia a su mera presencia desconoce cómo grupos armados (criminales) participan de la construcción del orden social en las periferias colombianas. Es decir, las economías ilegales y los actores armados por sí solos no son suficientes para entender la violencia contra las y los líderes sociales: en muchos contextos, la clave para explicar esa violencia es la combinación (perversa) de actores armados y economías ilegales con formas de dominación política y social local. En este sentido, esta es una manifestación de intentos por preservar formas de orden político y social que se ven amenazados por potenciales cambios sociopolíticos iniciados por los (modestos) puntos de desarrollo rural e inclusión política acordados por el Estado colombiano y las Farc-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo), y por el auge de la movilización social en nombre de reivindicaciones territoriales en respuesta al Acuerdo de paz.

A continuación discutiremos cómo entender el papel que desempeñan los grupos criminales, los actores políticos y el Estado en la construcción de orden social en

2 En julio de 2018, el entonces ministro de defensa Luis Carlos Villegas afirmó que los casos de asesinatos de líderes sociales son “[...] en su inmensa mayoría, fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de un tema de reivindicación, de un tema de pelea por rentas ilícitas” (*Pulzo*, “Mindefensa insiste en ‘líos de faldas’ para explicar asesinatos de líderes sociales”, 18 de julio de 2018). Su sucesor, Guillermo Botero, defendió una tesis similar: “Las muertes de los líderes no obedecen a retaliaciones por sus labores o por sus causas. Se deben a motivos personales, a hurtos y a retaliaciones [...]” (*Pacifista*, “Guillermo Botero: el ministro de la seguridad democrática 2.0”, 24 de enero de 2019).

3 Ver, por ejemplo: “Presidente Duque reiteró que detrás de los asesinatos de líderes sociales están el narcotráfico, la extracción ilegal de minerales y los grupos armados organizados”. Disponible en <https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Presidente-Duque-reitero-que-detras-de-los-asesinatos-de-lideres-sociales-estan-el-narcotrafico-la-extraccion-ilegal-200109.aspx>

las periferias. Posteriormente, haremos un recuento del proceso colombiano de construcción de orden social en la periferia y cómo los asesinatos de líderes sociales son parte de estos procesos, ahora en un contexto de posacuerdo.

2.1 GRUPOS ARMADOS Y ORDEN SOCIAL

Múltiples trabajos han mostrado cómo los espacios con una presencia precaria o parcial del Estado no son espacios “desgobernados”. En casos de guerra civil, por ejemplo, está ampliamente documentado y analizado cómo grupos armados construyen variadas formas de orden social local proveyendo importantes bienes públicos a la comunidad, como la resolución de disputas locales y hasta servicios públicos como la salud (Arjona, 2016; Arjona, Kasfir y Mampilly, 2015; Mampilly, 2011; Staniland, 2012, entre otros). Si bien estos trabajos contribuyeron a repensar nociones sobre las áreas en conflicto como espacios fundamentalmente anárquicos, la idea de que grupos insurgentes crearían formas de orden social –en ocasiones de formas complementarias e incluso cooperando con el Estado al cual combaten– era considerada posible, dado el carácter “político” adjudicado a estos actores.

Entender a los grupos criminales y la violencia que ejercen en algunos casos como algo con causas y connotaciones políticas requiere analizar a esos grupos como algo más que “empresarios” en la ilegalidad y reevaluar su relación con el Estado, así como con actores estatales y políticos (Albarracín y Barnes, 2020; Trejo y Ley, 2020). Las dinámicas de violencia responden a relaciones complejas de cooperación, negociación y competencia entre los grupos criminales y el Estado (Arias, 2017). En ocasiones, actores estatales, por ejemplo, crean esquemas de protección de grupos criminales y regulan (informalmente) mercados ilícitos (Trejo y Ley, 2020; Snyder y Durán-Martínez, 2009). Paradójicamente, muchos de los grupos criminales más importantes y mejor organizados surgen bajo la protección y –en ocasiones– con la participación de miembros (activos o retirados) de las fuerzas de seguridad del Estado (Correa-Cabrera, 2017; Durán-Martínez, 2018), muchas veces en el contexto de transiciones políticas (Trejo, Albarracín y Tiscornia, 2018; Cruz, 2011).

Recientemente, el estudio de la gobernanza local por parte de actores criminales nos muestra que en muchos espacios periféricos se crean formas de regulación de la vida social, donde grupos criminales desempeñan un papel relevante (Lessing, 2020; Barnes y Albarracín, 2020). Estas formas de gobernanza trascienden la regulación de mercados ilícitos o la organización de estructuras criminales y se involucran en tareas clave de la gobernanza de las comunidades como la resolución de disputas, la imposición de normas de conducta y la provisión de algunos servicios como el acceso a la salud (Arias, 2017; Biondi, 2018; Duncan, 2014; Feltran, 2010; Willis, 2015, entre muchos otros).

Adicionalmente, se ha estudiado cómo en ocasiones los grupos criminales participan de la regulación de procesos políticos como las elecciones (Ley, 2017). Localmente puede observarse cómo las relaciones entre actores políticos y criminales trascienden relaciones de “protección” e “impunidad” características de los mercados ilegales⁴; los políticos locales hacen alianzas o acuerdos con grupos criminales y utilizan las capacidades de estos para controlar poblaciones y usar la fuerza para impedir que rivales políticos puedan competir efectivamente en territorios periféricos, limitando así la competencia política (Albarracín, 2018; Albarracín y Barnes, 2019).

La literatura emergente sobre la violencia y la gobernanza criminal propone entonces que la violencia ejercida por parte de grupos criminales (organizados) debe ser entendida no solo como una acción tendiente a mantener el control de uno o varios mercados ilegales (y sus rentas), sino también como parte de acciones más amplias de control social y político de poblaciones. En esta dimensión de la gobernanza criminal –la gobernanza criminal sobre las comunidades– es importante entender las relaciones de las élites políticas locales con estos grupos.

4 En este contexto, por protección se entiende la que le proporciona un actor estatal a un grupo criminal de la acción de otros actores criminales. Impunidad se refiere a la no aplicación de la ley en contra de un grupo criminal por parte de un actor estatal.

2.2 ESTADO, AUTORITARISMOS COMPETITIVOS LOCALES Y VIOLENCIA CONTRA LÍDERES SOCIALES EN COLOMBIA

Aunque a inicios de los años dos mil era común hablar de Colombia como un potencial Estado fallido, esta categoría no era de gran utilidad para describir al Estado colombiano ni su presencia en las regiones periféricas (Gutiérrez Sanín, 2010; González y Otero, 2010). Evidentemente, y a pesar de su creciente capacidad en las últimas décadas (Gutiérrez Sanín, 2010; Flores-Macías, 2014), el Estado (nacional) colombiano ha tenido una capacidad limitada para penetrar todo su territorio y “hacer valer” las normas formales (Albarracín y Daly, 2019). Sin embargo, es más apropiado hablar de una presencia diferenciada del Estado (González, 2003; ver también Rasmussen y Valencia, 2018): el Estado colombiano tiene una gran capacidad administrativa, extractiva y coercitiva en zonas “centrales” del país (por ejemplo, zonas urbanas), permitiéndole regular efectivamente la vida social y política. En zonas más periféricas, es uno de varios actores que participa en la construcción del orden social y político (González y Otero, 2010, entre otros).

Esta presencia diferenciada del Estado es el producto de un proceso histórico mediante el cual el Estado central (o élites nacionales) delegaron en élites locales el control social y político de la periferia a cambio de no subvertir el orden nacional. Así, el Estado colombiano pudo al mismo tiempo evitar el costoso proceso de construcción de Estado en la periferia –lo que implicaría invertir en la presencia efectiva del aparato estatal para la provisión de justicia y seguridad, entre otros– y contener amenazas potenciales a su existencia por parte de élites regionales y locales (Robinson, 2013). La existencia del Estado (nacional) se garantizó permitiendo que élites locales y regionales controlaran los territorios periféricos, muchas veces estableciendo reglas (informales) que contradecían abiertamente el ordenamiento legal formal. Este control del poder local, a su vez, les daba a las élites locales una importante fuente de renta local, por ejemplo, mediante el manejo patrimonial de los recursos municipales, usufructuando de los poco transparentes registros de tierras o –sobre todo recientemente– participando de las rentas derivadas de actividades ilícitas.

Los grupos armados son parte esencial para entender estas formas de poder local. En algunos casos, son creaciones directas de élites locales. En otros, cooperan de cerca con ellas o las sustituyeron a su entrada en un territorio. En cualquier caso, numerosos grupos armados (criminales) no solo hacen presencia en un territorio para controlar una fuente de renta (ilícita). En muchas ocasiones su uso de la violencia está relacionado con el ejercicio del poder local y regional. La conocida parapolítica, por ejemplo, no solo es la historia del intento por parte de los grupos paramilitares de tener “presencia” en el Congreso: muestra también cómo élites políticas regionales y locales utilizan sus relaciones con grupos armados para mantener (violentamente) el control político sobre “sus” regiones (López, 2010, entre muchos otros).

En Colombia el resultado son formas de gobernanza local que en muchos municipios tienen rasgos autoritarios. Como muestra Gibson (2013) en su análisis del autoritarismo subnacional en regímenes democráticos, las élites políticas locales a veces logran subvertir las reglas democráticas formales establecidas en el ámbito nacional hasta el punto de establecer o mantener órdenes autoritarios regionales estables. Sin embargo, en contraste con algunos autoritarismos subnacionales en los sistemas federales analizados por Gibson –como, por ejemplo, en el sur de los Estados Unidos hasta los años sesenta/setenta o en algunas provincias de Argentina–, en el caso colombiano las reglas democráticas no se alteran formalmente. Las reglas que rigen la selección de autoridades locales, su estructura y funcionamiento están determinadas por la legislación nacional, que no puede ser alterada regional y localmente. Es decir, si en Colombia se quiere restringir la competencia por el poder local, se debe hacer de manera informal. En este contexto, para restringir el acceso al poder local, históricamente las élites políticas locales han hecho uso de múltiples estrategias informales como el clientelismo y la violencia (Nieto-Matiz, 2019) –ahora “tercerizada” a grupos armados (criminales)–.

De esta manera, en numerosos municipios lo que se observan son formas de autoritarismo competitivo local. Como en casos de autoritarismo competitivo nacional (Levitsky y Way, 2010), hay elecciones en las cuales participan grupos de oposición, incluyendo a líderes sociales,

pero el acceso al poder municipal por este medio está fuertemente restringido por una competencia electoral muy desigual. Lo que hace particular al autoritarismo competitivo local en Colombia es que los procedimientos formales son democráticos, pero el uso sistemático de mecanismos de control informal, incluyendo la violencia por parte de élites locales contra potenciales rivales, asegura un acceso muy desigual al poder.

De acuerdo con esta lectura, la violencia contra líderes sociales en muchos municipios del país responde a la lógica de autoritarismos competitivos locales. En la medida que los órdenes políticos sean más autoritarios, se deben esperar mayores niveles de violencia contra líderes sociales. Esto no quiere decir que la gobernanza de las economías ilegales *per se* no pueda generar violencia. La regulación de mercados ilegales involucra en algunos casos el uso de la violencia, incluso contra civiles. Sin embargo, la conclusión es que, en promedio, los municipios más violentos en Colombia son aquellos donde los

grupos criminales están aliados con élites locales para controlar el poder local y de esta manera sostienen autoritarismos competitivos locales. En la siguiente sección presentamos datos empíricos que sugieren que es así.

El Acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las Farc-EP estipula algunas reformas limitadas, cuya implementación local amenaza el control de la política local por parte de élites periféricas, así como sus rentas provenientes de las turbias relaciones de propiedad y de mercados ilegales (Gutiérrez Sanín et al., 2020; Prem et al., 2019). En este proceso, la movilización social alrededor de estas reformas –incluyendo, por ejemplo, los elementos participativos en los Programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET)– representa una amenaza a las estructuras del poder local. El uso de la violencia contra líderes sociales puede entenderse entonces como un mecanismo para contener procesos de cambio político local en el contexto de autoritarismos competitivos locales (ver Gutiérrez Sanín et al., 2020).

3

PANORAMA NACIONAL

En primer lugar, presentamos los resultados preliminares de un estudio que explora cuantitativamente los factores que explican el asesinato de líderes sociales (Albarracín, Milanese, Valencia y Wolff, 2020). Utilizando datos de Indepaz⁵ para el periodo comprendido entre 2016 y 2019, nuestro estudio analiza si la ocurrencia de la violencia contra líderes (es decir, si en un municipio se observa por lo menos un asesinato en el periodo) o su intensidad (es decir, el número de asesinatos cometidos en un municipio) están asociados a factores relacionados frecuentemente a este tipo de violencia –como la presencia de grupos criminales, economías ilegales o debilidad estatal– o (también) a variables de corte político. Como indicadores para captar las dinámicas políticas locales incluimos el porcentaje de participación electoral⁶, el nivel de fragmentación del sistema de partidos en el

municipio⁷ o el porcentaje de votos que obtuvo la izquierda en las elecciones locales (concejales municipales) de 2015⁸.

Adicionalmente, se analiza si el incremento en las hectáreas cultivadas de coca⁹ entre 2015 y 2016, la magnitud de la producción aurífera en onzas de oro¹⁰, el número de solicitudes de restitución de tierras¹¹, la presencia de grupos armados (Ejército de Liberación Nacional, ELN, bandas criminales, Bacrim) o de las Farc-EP (hasta el

5 Como se discutió en la primera entrega de esta serie, existen múltiples registros de la violencia contra líderes sociales en Colombia, que naturalmente no coinciden entre ellos. Como muestran Rozo y Ball (2020), estos registros tienden a subestimar el número potencial de asesinatos que ocurren, en particular los registros de la ONU. Los datos de Indepaz, además de acercarse más consistentemente al número estimado por Rozo y Ball, ofrecen información desagregada de fácil acceso sobre los lugares (municipios) y las fechas de los asesinatos, así como características de las víctimas. Esta información, en especial la localización y las fechas, son importantes para el análisis.

6 La participación electoral, aunque por lo general baja en Colombia, es en promedio mayor en las elecciones locales que en las nacionales. Restringir (violentamente) la participación de ciudadanos es una estrategia conocida de algunos grupos armados en Colombia (García, 2007). Si bien hay múltiples factores que afectan el nivel de participación, un nivel de participación bajo puede ser indicador de la presencia de formas locales de autoritarismo competitivo que, como sugerimos, se caracterizan por mayores niveles de violencia contra líderes sociales.

7 El número efectivo de partidos nos indica qué tanto se dispersan los votos entre los partidos en un municipio. Un alto nivel de concentración de votos puede indicar que el poder político local está concentrado en una o pocas fuerzas políticas, indicando así formas potenciales de autoritarismo local. Se esperaría entonces que, a mayor concentración de votos en pocos partidos, mayor el nivel de violencia observada contra líderes sociales.

8 El porcentaje de votos que obtiene la izquierda en el municipio puede considerarse un indicador de la fuerza de grupos políticos que pueden retar la hegemonía de élites locales. Se espera entonces que una mayor fuerza electoral de la izquierda sea una “amenaza creíble” contra formas de orden local establecidas, llevando a reacciones violentas por parte de élites locales en contra de personas, como líderes sociales, asociados a fuerzas progresistas.

9 Para medir el incremento en cultivos de coca se utilizan datos de la Unodc (United Nations Office on Drugs and Crime) y del Sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos (Simci).

10 Para medir la producción aurífera tomamos datos abiertos del gobierno colombiano sobre la producción de oro. Evidentemente, estos no son estimativos de extracción legal. Sin embargo, la producción mineral legal e ilegal tienden, particularmente la de oro, a estar muy ligadas o en espacios geográficos similares a la ilegal.

11 El número de solicitudes de restitución por municipio se calcula a partir de datos de la Unidad de Restitución de Tierras.

2015)¹², el nivel de violencia general (la tasa de homicidios), el tamaño poblacional, el nivel de capacidad estatal municipal¹³, tienen relación con la violencia contra líderes sociales.

Con el análisis cuantitativo podemos desarrollar el perfil de municipios donde estimamos hay un mayor riesgo de observar violencia contra líderes sociales o que esta sea más intensa, es decir, haya más asesinatos. Los municipios en general más violentos (es decir, con una mayor tasa de homicidios), de mayor población, donde las Farc-EP tuvo presencia entre 2010 y 2016 y con más cultivos de coca, tienden a tener una mayor probabilidad de que ocurran asesinatos o que esta violencia sea más intensa. El gráfico 1 muestra, por ejemplo, la relación entre los cultivos de coca y la probabilidad de que ocurra un asesinato en el ámbito municipal.

Al considerar el peso de estas variables en la discusión pública sorprende que algunos indicadores de la presencia de economías ilegales (como la extracción minera) no estén asociados consistentemente a mayores probabilidades de observar violencia contra líderes sociales. Más sorprendente aún es que no parecen existir diferencias significativas entre municipios donde han ocurrido o no asesinatos de líderes sociales en lo que respecta a la presencia del ELN, los paramilitares o bandas criminales. Esto, como lo discutiremos en la próxima sección, no quiere decir que las economías ilegales o la presencia de grupos armados no estatales sean una variable irrelevante para entender el asesinato de líderes sociales. Sin embargo, sí indica que puede haber municipios con presencia de economías ilegales mineras o grupo armados

(criminales) sin que haya violencia contra líderes sociales. Es necesario explorar entonces cómo estos grupos y estas actividades ilícitas se conectan con otros procesos (políticos) y de esta manera resultan en la violencia contra líderes sociales.

Las variables que nos muestran características de los procesos políticos en los municipios son aquellas relacionadas consistentemente con los niveles de violencia contra líderes sociales en el posacuerdo. Aquellos municipios donde hay menor participación electoral o donde la competencia política está concentrada en uno o pocos partidos tienden a exhibir más violencia contra líderes sociales. Como lo muestra el gráfico 2, los municipios con menor participación electoral de sus ciudadanos son, en promedio, más violentos.

La concentración de votos en pocas fuerzas políticas puede ser, como mostramos, un indicio de la existencia de formas de autoritarismo competitivo local, es decir, lugares donde élites políticas locales tratan de mantener su control sobre la política restringiendo la competencia política (electoral) mediante prácticas informales, como el uso de la violencia contra rivales o agrupaciones políticas y sociales alternativas. En este sentido, en el gráfico 3 se muestra cómo, en promedio, hay más violencia contra líderes sociales en municipios con mayor concentración política.

Los municipios en donde los partidos de izquierda obtuvieron mayor porcentaje de votos en las elecciones de 2015 para los concejos también tienen mayores probabilidades de violencia (gráfico 4). La firma de un Acuerdo de paz que implicaba la implementación de proyectos de desarrollo participativo en zonas particularmente afectadas por el conflicto (PDET), sustitución de cultivos (Programa nacional integral de sustitución de cultivos, PNIS), restitución de tierras y reparación de víctimas, y mayores oportunidades de participación política, no solo movilizó grupos sociales históricamente marginados de las decisiones políticas, en especial en regiones periféricas. Representó también una amenaza a formas de poder local que intentan oponerse al Acuerdo y sus componentes haciendo uso de la violencia.

Así, por ejemplo, Gutiérrez Sanín et al. (2020) asocian el asesinato de líderes de procesos de restitución y sustitución

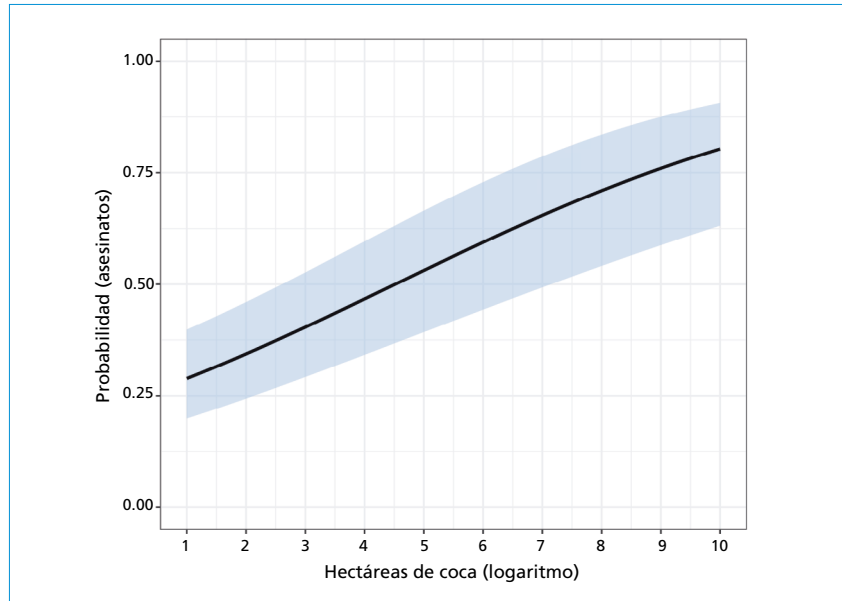
12 Utilizando datos del *Violent Presence of Armed Actors in Colombia (ViPAA) dataset* (Osorio et al., 2019) definimos a municipios que tuvieron presencia activa de la Farc-EP entre 2010 y 2016 como aquellos donde hubo al menos un evento violento de esta organización. Para establecer la presencia o no del ELN o bandas criminales se usó la misma base de datos y procedimiento.

13 Para medir la capacidad estatal del municipio usamos la medida de desempeño municipal del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Esta medida es un índice compuesto por indicadores de capacidad de manejo fiscal, recolección de impuestos locales y provisión de servicios públicos de gobiernos municipales.

ción de cultivos ilícitos a la amenaza que estos procesos y estos líderes representan para formas autoritarias de poder local. En este contexto, una mayor fuerza política de la izquierda electoral –a la que con frecuencia están asociados líderes sociales– representa una “amenaza”

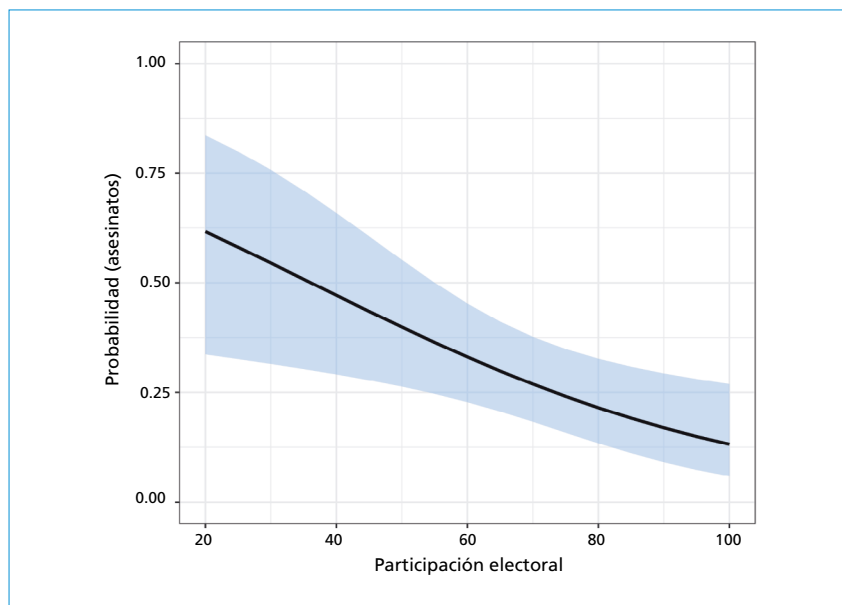
más creíble al poder de élites políticas tradicionales que utilizan la violencia contra estos grupos políticos y las fuerzas sociales aliadas para contener mayores procesos de cambio.

Gráfico 1
Cultivos de coca y probabilidades del asesinato de líderes sociales



Fuente: Albarracín et al., 2020.

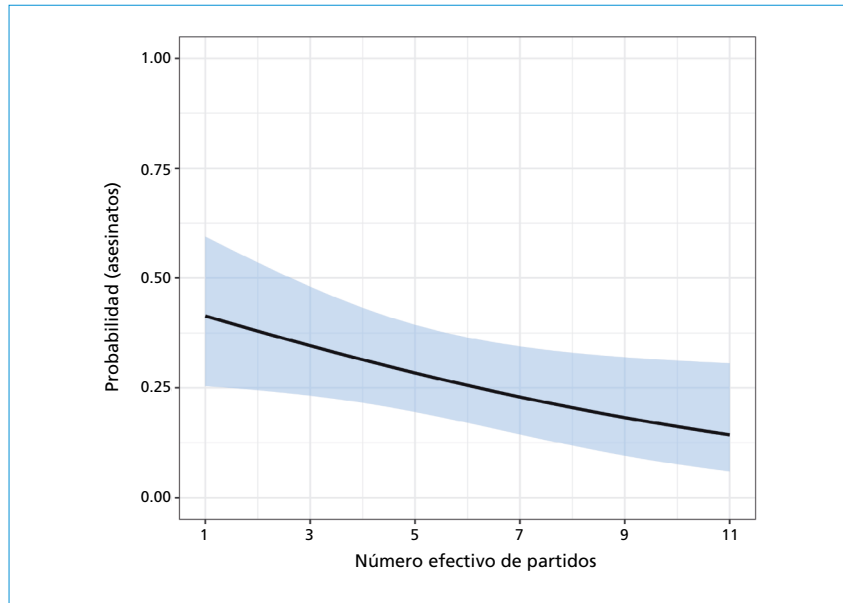
Gráfico 2
Participación electoral y probabilidades del asesinato de líderes sociales



Fuente: Albarracín et al., 2020.

Gráfico 3

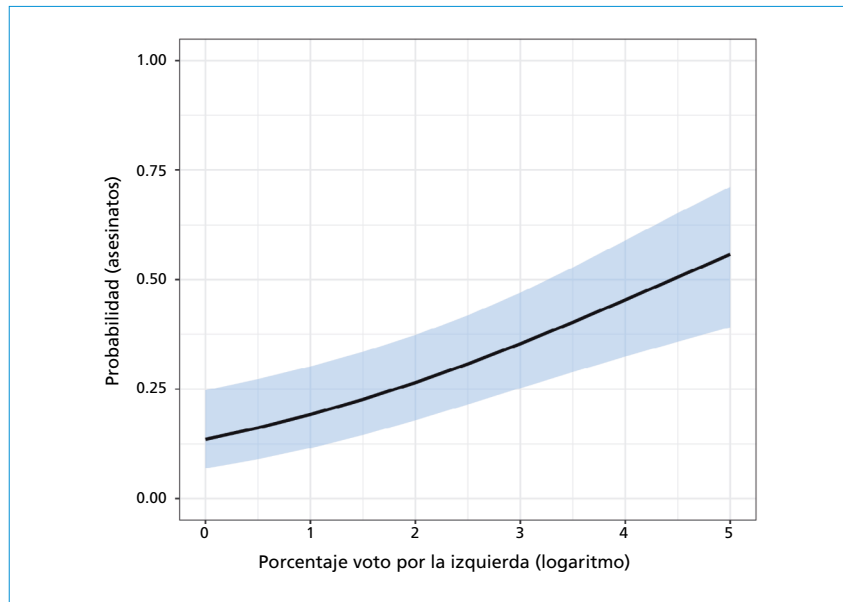
Número efectivo de partidos y probabilidades del asesinato de líderes sociales



Fuente: Albarracín et al., 2020.

Gráfico 4

Porcentaje de votos de izquierda y probabilidades del asesinato de líderes sociales



Fuente: Albarracín et al., 2020.

4

ÓRDENES SOCIALES LOCALES Y VIOLENCIA EN TRES REGIONES DEL PAÍS

Los resultados cuantitativos nos muestran algunos factores asociados a un mayor riesgo de que en un municipio haya asesinatos de líderes sociales. Sin embargo, el hecho de que una variable, como la presencia de ciertos grupos armados, no resulte relevante en este análisis, no significa que no sea importante para entender este tipo de violencia. En el caso de Colombia, implica que debemos explorar en más detalle las complejas relaciones existentes entre economías ilegales, grupos armados (criminales) y formas de poder local. Por ejemplo, por sí sola, la presencia de un grupo criminal que pretende controlar un mercado ilegal no necesariamente conduce a violencia contra líderes sociales. Pero cuando élites políticas locales están estrechamente ligadas a economías ilegales y grupos armados, el mantenimiento del poder local por parte de ellas se consigue muchas veces por medio de acciones violentas ejecutadas por grupos criminales contra políticos y líderes sociales. Es decir, las élites locales delegan el uso de la violencia en los grupos criminales.

En esta sección exploramos brevemente los tres casos que fueron introducidos en el documento “Violencia y órdenes políticos locales en el posacuerdo”¹⁴: el bajo Cauca antioqueño, la región norte del departamento del Cauca y el municipio de Tumaco en el departamento de Nariño. En estas regiones confluyen economías ilegales (en particular, la coca/cocaína y la minería ilegal), una presencia histórica de grupos armados y, como se verá a continuación, formas de poder local en muchos casos

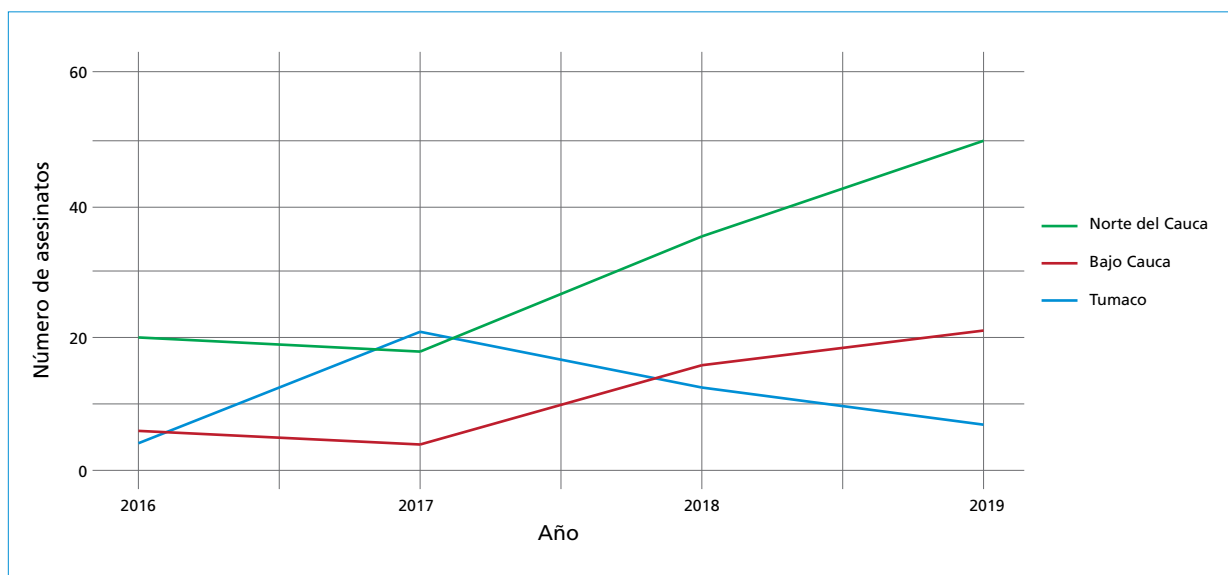
íntimamente relacionadas con economías ilegales y que mantienen autoritarismos competitivos. Como lo muestra el gráfico 5, estos tres casos exhiben un altísimo número de casos de violencia letal contra líderes sociales. Según Indepaz, los trece municipios del norte del Cauca representaron en 2019 el 18% de todos los asesinatos a líderes sociales en el país; en el caso del bajo Cauca, sus seis municipios significaron el 7,6% del total nacional; y en 2017 los asesinatos a líderes sociales en Tumaco, es decir en un solo municipio, fueron el 10% de todos los casos de líderes asesinados en el país.

4.1 NORTE DEL CAUCA: VIOLENCIA, MINERÍA Y RUPTURA DE PROCESOS SOCIALES

Como se discutió en el primer análisis de esta serie, en el norte del Cauca los cultivos de uso ilícito y la minería de enclave extractivo ilegal son dos de las rentas ilegales que han sido asociadas al recrudecimiento de la violencia que se vive en la región. A pesar de que las poblaciones afrodescendientes de la región han desarrollado la minería como actividad tradicional de subsistencia, a partir del año 2000 empezaron a entregarse concesiones para la explotación a empresas multinacionales extranjeras¹⁵,

14 Véase Juan Albarracín et al. 2020. “Violencia y órdenes políticos locales en el posacuerdo: las dinámicas territoriales en el norte del Cauca, el bajo Cauca antioqueño y Tumaco”. *Análisis*. Septiembre. Fescol. Bogotá. Disponible en <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/16471.pdf>

15 Esta situación sobresale en los municipios de Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao, donde el gobierno ha entregado treinta y tres títulos mineros sin contar el que corresponde a la Universidad del Cauca, que ocupa la zona occidental de Suárez y Buenos Aires, y de otros municipios de los departamentos del Cauca y el Valle. Esos treinta y tres títulos cubren un área cercana a 20.000 hectáreas (19.893,8 ha). De ellos, diecisiete corresponden a explotaciones de minerales como el oro, la plata, el cobre o asociados. Los restantes corresponden a ocho títulos para explotar carbón, y siete para materiales relacionados con la arcilla, materiales para la construcción y el

Gráfico 5**Número de asesinatos de líderes sociales en el norte del Cauca, el bajo Cauca y Tumaco, 2016-2019**

Fuente de los datos: Indepaz.

y también el desarrollo de actividades ligadas a la minería ilegal por parte de grupos armados relacionados con el paramilitarismo y bandas criminales vinculadas a la economía del narcotráfico.

En el caso del norte del Cauca, empresarios mineros nuevos y foráneos asociados a grupos armados ilegales han diseñado estrategias para acceder a los territorios de las poblaciones afrocampesinas. Líderes pertenecientes a consejos comunitarios de municipios como Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao han denunciado las amenazas que reciben por oponerse a estas formas de minería, pero también denuncian la captación y coacción que estas poblaciones enfrentan respecto al fenómeno minero. Esta situación hace que las comunidades se debatan entre resistir o vincularse como mano de obra en actividades extractivas que ven la naturaleza como recurso o fuente de rentas, y no como el medio que posibilita trayectorias sociales y colectivas autóno-

arrastre, la arena, la grava y los materiales pétreos. Además de esas titulaciones, se espera la respuesta del gobierno a otros siete proyectos, que cubrirían un área cercana a 4.663,29 ha. De esas solicitudes, tres son para la explotación de oro y asociados, dos para la explotación de caolín, una para el cobre y otra para la arcilla común (Tello y Valencia, 2016).

mas, como se ve en una de las entrevistas realizadas en nuestro trabajo:

Allí ya da cosa ponerse uno a estar güevoneando con eso, así de claro. Yo era uno de los que decía, *me matan pues y yo me hago matar por la comunidad, pero cuando me di cuenta*, a muchos de nosotros que en algún momento teníamos una actitud heroica de reivindicación de los derechos de la comunidad, la cosa nos cambió con el auge de la minería [...], cuando nosotros vamos a competir contra los millones de pesos, cuando quienes tienen las herramientas coercitivas como el alcalde, el gobernador, el director de tal cosa, el director de tal otra no se mueven, y cuando esa cosa de la minería y de los millones de pesos ya empiezan a colocar a la gente de la comunidad en contra nuestra, o sea ya uno está en una isla. Es la verdad, nosotros estamos en una isla y en esa isla es que hay una gente que está haciéndole oposición al tema que se ha logrado caer. Estar en esa isla no permite y lo peor es cuando ya vienen las amenazas de parte de actores armados, es decir que, *si ustedes se oponen al desarrollo, los vamos a matar*. Ya la gente no se mueve con la misma libertad (entrevista a líder social, abril de 2020).

La presencia de grupos armados ilegales en esta zona no la explica solamente el auge minero ilegal, sino que está asociada también a los cultivos de uso ilícito que

hay en algunas zonas rurales para asegurar su movilidad y abastecimiento. Esto se evidencia en el aumento de la violencia sobre todo en corredores estratégicos como el del río Naya, que pasando por López de Micay asegura su salida en Puerto Merizalde, donde circula la economía ilegal asociada principalmente al narcotráfico y la minería, o en municipios como Corinto, Argelia y el Tambo, en donde la presencia de cultivos de uso ilícito también se ha asociado al aumento de la violencia.

Sin embargo, el impacto que han tenido la minería ilegal y el narcotráfico no se puede entender sin hacer referencia a las formas de poder político local en esta región, donde élites políticas locales más tradicionales disputan su predominio político y electoral con organizaciones y movimientos sociales:

Inicialmente, el poder de la élite local se encontraba:

[...] fundamentad[o] en el predominio de una élite política dominante asociada a la gran propiedad, que, gracias a los partidos políticos tradicionales, facilita las relaciones de clientela y asume los intereses colectivos como intereses de clase. De modo que, los sectores indígenas, campesinos y cívicos de esta región por décadas se vieron condenados al 'ostracismo político'. Sin embargo, las iniciativas de resistencia comunitaria de estos sectores, llevadas al nivel electoral, han venido desarrollando un proceso de redefinición de esta estructura tradicional, encontrando como principal obstáculo para su consecución la represión paramilitar asociada a las élites políticas señaladas y su lógica excluyente (Misión de Observación Electoral, Universidad del Cauca, 2010).

Aun cuando para las élites tradicionales locales el control de la tierra se complementa con la relación con grupos armados ilegales, tal como lo demostró uno de los líderes en las entrevistas realizadas:

"Hay actores de esa clase política que tienen vínculos directos con actores o grupos armados ilegales en la región, los políticos aquí tienen un ala pa'dios y un ala p'al diablo", ya que "muchos de los alcaldes de la región, por ejemplo, tienen retroexcavadoras sacando oro de manera ilegal y se amparan bajo el esquema de seguridad de la ilegalidad, además tienen vínculos con los caciques de la política caucana" (entrevista a líder social, abril de 2020).

Por otro lado, para entender la articulación entre diferentes partidos políticos, es necesario entender las transformaciones de las dinámicas electorales en la subregión. Según el informe de la Misión de Observación Electoral (2017) sobre las dinámicas electorales en el norte del Cauca, hasta 2007 se mantuvo un bipartidismo entre el Partido Liberal y la Alianza Social Independiente. Sin embargo, para 2011 se identificó que el electorado se movió hacia otras fuerzas alternativas, con lo que el Partido Liberal inició su declive. En otra de nuestras entrevistas, realizadas con el objetivo de conocer cómo se han reconfigurado estas relaciones con los partidos, se manifiesta que:

"Si bien había una predominancia del Partido Liberal en el norte del Cauca, hoy en día eso ha mutado. Aquí no hay un proceso de élites que estén basadas en ideologías políticas; lo que mueve todo el asunto político-electoral y la representación pública está en función del dinero, ya que el norte del Cauca mantiene al departamento del Cauca, porque deja muchos recursos económicos tanto legales (caña, parques industriales, ganadería) como ilegales (coca, oro), por la renta y su capacidad económica, por los flujos de caja y todo lo que aporta". Para esta lideresa, en la región existe una élite política corrupta que "permea los sistemas de democracia locales y territoriales y genera alianzas que facilitan la permanencia de este conflicto armado. En esta región se naturaliza la violencia. El norte del Cauca está en medio de una cultura racista, excluyente y clasista, que lo legitima y avala desde la dirigencia política" (entrevista a lideresa social, abril de 2020).

Además, la gran mayoría de las alianzas con políticos y otros sectores criminales giran alrededor de la toma del poder local, para llegar a las alcaldías o a los concejos, lo cual se hace con la coacción de los actores armados, buscando también el debilitamiento de la organización social: "Aquí se juntan los intereses de los narcos con los intereses de sectores políticos y económicos a los que les estorba la reivindicación social" (entrevista a líder social, abril de 2020). Esto es evidente cuando revisamos la pertenencia de líderes y lideresas sociales asesinados a procesos organizativos como la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), la guardia indígena, miembros de organizaciones sociales afro o de juntas de acción comunal y zonas de reserva campesina.

Finalmente, al recrudecimiento de la violencia sumamos la confrontación que se da a partir de la diversificación de actores armados. Si bien en la década de 2010 en la región sobresalían la presencia de las Farc-EP (por medio del frente 30 o de la columna Jacobo Arenas) y de las Águilas Negras y los Rastrojos como estructuras herederas del paramilitarismo, el panorama actual muestra unos actores mucho más diversificados y más grises, sin estructuras y mandos claros. Esta situación no solo ha aumentado los enfrentamientos entre bandas criminales (con nexos con la criminalidad organizada) y las disidencias de las Farc-EP. También ha creado una oferta de especialistas en el uso de violencia más amplia, que está a disposición de actores políticos locales dispuestos a utilizarlos para mantener su control de la política local —si es necesario violentamente—.

4.2 BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO: ENTRE LA TRADICIÓN PARAMILITAR Y LAS DISPUTAS MINERAS

A raíz de la gran presencia de las guerrillas como las Farc-EP y el ELN en la región del bajo Cauca, desde las décadas de los ochenta y noventa se configuró una guerra interna por el control del territorio y los recursos mineros, lo cual se tradujo luego en una lucha constante entre las guerrillas y ciertos poderes locales que recurren a grupos paramilitares para proteger la actividad minera y ganadera. Esta situación se consolidó a mediados de la década de los noventa con la llegada del bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y, posteriormente, con los grupos de herencia posparamilitar que se incrustaron con fuerza en la región.

Es importante remarcar que la minería es un factor clave para entender las dinámicas de recrudecimiento de la violencia y de regulación del orden social y el poder local en el bajo Cauca. Al ser la región, junto con la serranía de San Lucas, con la cual limita, con la mayor producción de oro del país (MinMinas, 2014, en Correa, 2017), allí hay varias formas de minería que transitan entre lo legal y lo ilegal. Las tres formas en que se desarrolla esta actividad han causado profundas fracturas y procesos de violencia y despojo regional: la minería legal por parte de las compañías mineras nacionales y multinacionales;

la criminal realizada por parte de los grupos armados; y la artesanal adelantada por los pobladores de la región. Así, es claro que además de la puja entre las actividades legales, la minería artesanal ha quedado sumida en el enfrentamiento con las empresas legales y las exploraciones ilegales controladas por actores armados: “Muchos de estos sitios se encuentran ocupados por mineros informales y mantienen una constante discordia con la empresa para ejercer la actividad, pese a saber que están en territorios concesionados a la empresa” (Guarnizo, 2014, en Correa, 2017).

La relación conflictiva entre la empresa Mineros S. A. y los mineros artesanales que ocupan sus territorios es de vital importancia para entender la encrucijada en la que se encuentra esta región a causa de la minería. Por un lado, muchos de estos mineros artesanales son coaccionados por actores armados ilegales, quienes les suministran maquinarias (*El Tiempo*, 2019), pero estos grupos también extorsionan a los mineros de pequeña escala, ya que exigen “vacunas” que oscilan entre tres y cinco millones de pesos por el uso de retroexcavadoras y bulldóceres. Esta última situación es de gran importancia ya que distintos actores armados se financian con esta renta ilegal. Estudios de la Universidad Eafit sobre minería retomados por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) (2014) calculan que, en el pago de vacunas para la utilización de maquinaria, los grupos armados ilegales estarían recibiendo mensualmente entre 650 y 3.450 millones de pesos.

Como mencionamos en el primer documento de esta serie, a los conflictos asociados con la minería hay que sumar que el bajo Cauca es un corredor geoestratégico que permite una interconexión entre el sur de Córdoba, la serranía de San Lucas, el Nudo de Paramillo y el nordeste antioqueño, y garantiza la salida hacia el golfo de Urabá, por lo que ha sido una región disputada por diversos actores armados. En Tarazá, municipio de esta región, fue donde Ramiro Vanoy, conocido como *Cuco Vanoy*, creó el bloque paramilitar Mineros, que se asentó en ese municipio por ser una troncal que conduce a la Costa, con salida directa al golfo de Morrosquillo, utilizado por el narcotráfico como puerto (*Verdad Abierta*, 2008).

La importancia de la región como “botín” minero está ligada a una larga historia de paramilitarismo y parapolítica. La presencia paramilitar se manifiesta tanto en su expresión armada, como en el establecimiento de alianzas con familias y redes de poder local. Según la fundación Pares, entre ellas destacan los Suárez Mira, Julián Bedoya, Germán Hoyos, Luis Horacio Gallón y Eduardo Tous. La vida política en la zona se mueve de acuerdo a los órdenes establecidos por esas familias, asociadas a los partidos tradicionales de Colombia (Pares, 2018).

Con la transformación del paramilitarismo no desaparecieron las fuertes relaciones entre grupos armados ilegales y políticos locales, íntimamente ligados a las élites mineras y con fuerte control sobre los gobiernos locales. Varios alcaldes y concejales han sido sujeto de investigación por corrupción y mantienen estrechas relaciones con grupos al margen de la ley. En el municipio de Caucaasia figuran los nombres de los alcaldes Juan Carlos Garcés Estrada, quien “fue investigado en el proceso de la parapolítica, luego de los señalamientos que hizo en su contra el exjefe del bloque Mineros, alias *Cuco Vanoy*, por el supuesto apoyo al grupo de autodefensas” (RCN Radio, 2018); y José Nadín Arabia, quien fuera alcalde tres veces: en 1992, 1998 y 2012. En sus declaraciones ante el Tribunal de Justicia y Paz en 2014, *Cuco Vanoy* lo mencionó como parte de los políticos cercanos al bloque Mineros (*La Silla Vacía*, 2019). Por último, se puede mencionar a Óscar Aníbal Suárez, quien según Pares (2018), estaría detrás de la muerte de un excandidato a ese cargo en el municipio (*El Colombiano*, 2015).

En Cáceres, José Mercedes Berrío Berrío, *Merceditos*, ha sido señalado como presunto responsable de concierto para delinquir con fines de extorsión y promover grupos armados ilegales. Según la investigación, tenía nexos con algunos cabecillas y miembros del Clan del Golfo en la subregión (Noticias UNO, 2018). Además, era un apadrinado político del senador Julián Bedoya para la alcaldía del municipio (Pares, 2018).

En Tarazá, Miguel Ángel Gómez, exalcalde, ha sido cuestionado por sus nexos con paramilitares desde su primera alcaldía y señalado de aliarse “con el bloque Mineros para acabar con el sindicato de trabajadores conocido como Sintraofan” (*Elbajocauca.com*, 2017). Dinámicas

similares de control de la política local pueden observarse en El Bagre, Nechí y Zaragoza.

En el bajo Cauca sobresalen dos situaciones: primero, la persistencia de la violencia mediante la diversificación de actores a partir de la salida de las Farc-EP. Esta situación se puede resumir en la intensa confrontación que actualmente se da entre el Clan del Golfo y los Caparrapos, un grupo heredero del bloque Mineros de las AUC. Es decir, a pesar de ser una región donde la violencia se utilizó para volver hegemónico el control paramilitar en los noventa, actualmente continúa siendo disputada, ahora por diversos grupos de clara herencia paramilitar. Segundo, estos grupos armados mantienen relaciones estrechas con políticos locales y regionales, fuertemente ligados con élites mineras. Estas alianzas les permiten, como lo mencionaron algunas de las entrevistas que realizamos para nuestro trabajo de campo, contener la participación efectiva de proyectos políticos alternativos en la política local, si es necesario por medio del uso de la fuerza.

4.3 TUMACO: EXTRACTIVISMOS PERSISTENTES, NARCOTRÁFICO Y CAPTACIÓN DE RENTAS DEL ESTADO

En el caso de Tumaco, la alianza entre élites políticas locales y grupos armados ilegales que sostenga autoritarismo competitivo locales no se ve con la misma intensidad de los otros casos –o por lo menos la evidencia no es tan clara–. Sí hay, como se mostrará a continuación, importantes economías ilegales (en particular, los cultivos de uso ilícito), fuerte presencia de grupos armados no estatales y una tradición de élites políticas locales acusadas de corrupción. Sin embargo, no hay evidencia contundente de que estas dinámicas se combinen. Es posible entonces que la violencia contra líderes y lideresas sociales, que fue mucho más intensa en los primeros años del posacuerdo y disminuyó en años recientes, estuviera más asociada a la reacomodación de las economías ilegales y grupos armados que a dinámicas de política local.

La configuración de la violencia en Tumaco puede comprenderse a partir de los diferentes ciclos extractivos que

ha vivido la región. En ese sentido, y como se expuso en el primer documento de esta serie, para comprender el desarrollo del conflicto es necesario remitirse a los periodos de bonanza maderera, palmera y cocalera. La bonanza maderera tuvo lugar entre 1945 y 1980. La explotación intensiva de madera aserrada hizo de Tumaco, por un lado, el principal centro de su exportación, pero, por otro, convirtió el suelo en grandes planicies aptas para el cultivo de palma africana en la década de 1980. A mediados de la década de los noventa, a partir del debilitamiento de los cultivos de palma africana y del aumento de fumigaciones en el Putumayo, los cultivos de coca se trasladaron a la región. Así, entre 2003 y 2012 Tumaco pasó del tercer al primer municipio con mayor número de hectáreas de coca sembradas en Colombia. En otras palabras, esos cultivos se incrementaron de 776 hectáreas en 1999 a 5.062 en 2012, una dinámica acompañada del aumento en los indicadores de violencia y de intensidad del conflicto armado, reflejados en la tasa de homicidios, que pasó de 57,1 por 100.000 en 1999 a 130,4 por 100.000 en 2012, y en el incremento progresivo de acciones armadas guerrilleras, atentados contra la infraestructura energética, principalmente, además de hostigamientos y emboscadas (Salas, Wolff y Camelo, 2019: 506-508).

Estas actividades ilegales se concentran principalmente en el cultivo y procesamiento de coca, así como en la ocupación informal de tierras para el cultivo de hoja de coca y la minería ilegal. En cuanto al cultivo de palma aceitera, aunque es una actividad legal, históricamente ha propiciado diversos escenarios para el surgimiento de economías ilegales, debido a que la deforestación empleada por las empresas palmeras, acompañada por la construcción de carreteras, "dio lugar a la explotación ilegal de la madera sacada sin ningún tipo de control estatal" y a la expansión de los cultivos de coca (López, 2008). Además de propiciar estos escenarios, las empresas palmeras han sido señaladas de estar vinculadas a grupos paramilitares y sicariales para el despojo de tierras a los campesinos.

Sobre la relación entre conflicto y proyectos agroindustriales, el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la Universidad Nacional de Colombia (Observatorio de Procesos de Desarme, Des-

movilización y Reintegración, 2011) señala que las plantaciones agroindustriales de la costa Pacífica y del piedemonte de la cordillera Occidental, en donde se cultivan grandes plantaciones de caucho, palma aceitera y coca, han generado situaciones de conflicto con comunidades indígenas y afrodescendientes. Estos conflictos se han expresado en los procesos de despojo territorial y en el uso de la violencia asociada a la expansión paramilitar. Según el testimonio de alias *Pablo Sevillano*, la llegada de las AUC a Tumaco a partir de 1999 parte de la petición hecha por palmicultores, comerciantes, terratenientes e industriales a las Autodefensas para que les "ayudaran" a contener los crímenes de las Farc-EP y resolver *de facto* los conflictos por la tierra. Esta petición se suma a la intención de Carlos Castaño de expandir el paramilitarismo al sur del país, y al valor estratégico de Tumaco para el tráfico de drogas (Rasmussen y Valencia, 2018). Después de la desmovilización del frente Libertadores del Sur en 2005, buena parte de los combatientes se organizaron en otros grupos, como la Organización Nueva Generación, grupos pertenecientes a las Águilas Negras y a las Autodefensas Campesinas de Nariño (Rasmussen y Valencia, 2018). Después del proceso de desmovilización de las Farc-EP sobresale el surgimiento de grupos provenientes de la columna móvil Daniel Aldana y del frente 29, que han dado origen a varios grupos como las Guerrillas Unidas del Sur, Guerrillas Unidas del Pacífico y el frente Oliver Sinesterra (Fundación Ideas para la Paz, 2018).

En general, las disputas entre estos grupos armados y sus intentos de controlar territorios y corredores estratégicos han sido acompañadas por un incremento muy notable en la violencia, tanto en cuanto a la tasa de homicidios como con respecto a los asesinatos de líderes sociales (Salas, Wolff y Camelo, 2019). En consecuencia, varios de los líderes y lideresas sociales asesinados en el municipio de Tumaco pertenecían al pueblo awá, un pueblo que ha vivido tradicionalmente en las cuencas de los litorales del Pacífico sur y que ha tenido que enfrentar el confinamiento territorial y la violencia ejercida por diversos actores, ya que sus territorios tradicionales se ubican en lugares de interés geoestratégico para el desarrollo de actividades ligadas al narcotráfico. También sobresalen algunos líderes asociados a consejos comunitarios y otros vinculados a los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito.

A la persistencia del conflicto armado asociado al control territorial, en Tumaco hay que sumar la existencia de una alta concentración de la propiedad de la tierra y la persistencia de una serie de problemáticas sociales vinculadas a la concentración del poder en algunas familias. La dinámica política de Tumaco está muy relacionada con el poder de las élites locales. Aunque estas no han podido consolidarse como verdaderas fuerzas políticas departamentales, históricamente sí han mantenido el control del municipio por medio de familias tradicionales y una estructura de clanes (Pares, 2019). En medio de todo ello sobresale la captación de rentas del estado por parte de miembros de la política local, en particular de algunos alcaldes elegidos en los últimos años.

La Fundación Paz y Reconciliación (Pares, 2019) señala que en el municipio de Tumaco coexisten varios clanes familiares que han controlado el poder local, como son las familias Escrucería Manzi y Del Castillo Torres. De acuerdo con algunas entrevistas, de estas familias nacieron otras corrientes políticas como los Correa Díaz, los Angulo, los Valencia, los Marines, los Rivera y la familia Gallo. Estos clanes buscan llegar al poder local como una manera de apropiarse las rentas del Estado por medio de redes clientelistas y de actividades ligadas a la desviación

de recursos por parte de algunos alcaldes. Por ejemplo, Julio César Rivera, elegido en 2017, fue capturado en diciembre de 2018 con los cargos de peculado, contrato sin cumplir requisitos legales y falsedad en documento público. La actual alcaldesa de Tumaco fue destituida de su cargo en 2016 debido a una inhabilidad, y es heredera de Nefalí Correa, un tradicional político liberal, quién fue alcalde entre 2008 y 2011, representante a la cámara por Chocó e inhabilitado debido a procesos de malversación de fondos públicos.

El caso de Tumaco muestra entonces la persistencia de la violencia asociada a las economías ilegales, ya que allí encontramos tanto actividades ligadas a la producción (por medio de la existencia de cultivos de coca) como a su procesamiento. No obstante, los lugares más disputados y donde hay más violencia se relacionan con el control necesario para asegurar las actividades de intermediación o salida de la droga a través de los ríos y el mar. El flujo de las economías ilegales en el contexto rural y la captación de rentas legales en el contexto urbano son aspectos que permiten entender la incrustación de la violencia y la conformación de un orden político particular para este caso.

5

REFLEXIONES FINALES

La violencia ejercida contra líderes y lideresas sociales después del Acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Farc-EP no solo es el resultado de la presencia de grupos criminales y economías ilegales en el territorio. Esta violencia sigue también una lógica política de acuerdo con la cual actores políticos locales delegan en grupos armados ilegales –muchas veces íntimamente relacionados con ellos– el uso de la violencia contra rivales políticos y líderes sociales que amenazan con desarticular formas de autoritarismo competitivo local. En este sentido, no solo son los municipios con “más coca” o con la presencia de grupos armados no estatales donde ocurren los asesinatos de líderes sociales. Son asimismo municipios donde hay indicios de formas de autoritarismo local: menor participación en las elecciones y más concentración de votos en pocos partidos. En particular, se estima que hay más violencia en los lugares donde fuerzas alternativas representan una “amenaza creíble” a los órdenes políticos locales establecidos.

Estas formas de estructuración del orden social y político en la periferia no son nuevas. En el pasado reciente, élites locales delegaron en grupos paramilitares e incluso guerrilleros el uso de la fuerza contra rivales políticos y organizaciones sociales. En la actualidad, con los cambios ocurridos en el universo de grupos armados no estatales en Colombia, esta violencia es ejecutada por

grupos criminales con otros nombres. Pero la lógica política detrás de esta violencia es similar. En este sentido, la protección de líderes sociales requiere no solo de la presencia armada del Estado en la periferia para “desmantelar” estructuras criminales. Requiere asimismo de acciones –desde las fuerzas de seguridad pública hasta la administración de justicia– que desarticulen las densas redes que unen actores políticos con grupos armados (criminales) y facilitan procesos reales de participación e inclusión política local. Ausente esto, cualquier esfuerzo de protección a los líderes y lideresas no será sostenible. En cierta medida, desde el Estado central se debe romper con formas históricas de construcción del Estado en Colombia.

Si el uso de la violencia contra líderes y lideresas sociales es una manifestación de la presencia de formas de autoritarismo competitivo local en algunas periferias, es esperable que esta violencia tenga también impacto en la participación política. La violencia ejercida contra los líderes no solo busca “neutralizar” a un individuo: busca disuadir y atemorizar a toda una comunidad y evitar procesos de movilización social y política. Por esto, en el siguiente análisis exploraremos los efectos de la violencia contra líderes sociales en la participación política electoral.

REFERENCIAS

- Albarracín, Juan.** 2018. "Criminalized Electoral Politics in Brazilian Urban Peripheries". *Crime, Law, and Social Change*. 69 (4): 553-575.
- Albarracín, Juan y Nicholas Barnes.** 2019. "Criminalized Democracy: The Electoral Impact of Rio de Janeiro's Gangs". Paper presented at the 2019 Annual Meeting of the American Political Science Association, Washington D. C.
- . 2020. "Criminal Violence in Latin America". *Latin American Research Review*. 55 (2): 397-406.
- Albarracín, Juan y Sarah Z. Daly.** 2019. "Determinants of State Strength and Capacity: Understanding Citizen Allegiance". En James Meernik, Jacqueline H. R. DeMeritt y Mauricio Uribe-López (eds.). *As War Ends. What Colombia Can Tell Us About the Sustainability of Peace and Transitional Justice*. Cambridge University Press. New York, pp. 91-111.
- Albarracín, Juan, Juan Pablo Milanese, Inge Valencia y Jonas Wolff.** 2020. "Electoral Competition, Local Political Orders, and Criminal Violence. Analysis of the Assassination of Social Leaders in Colombia". Manuscrito inédito.
- Arias, Enrique Desmond.** 2017. *Criminal Enterprises and Governance in Latin America and the Caribbean*. Cambridge University Press. New York.
- Arjona, Ana.** 2016. *Rebelocracy: Social Order in the Colombian Civil War*. Cambridge University Press. New York.
- Arjona, Ana, Nelson Kasfir y Zachariah Mampilly.** 2015. *Rebel Governance in Civil War*. Cambridge University Press. New York.
- Barnes, Nicholas y Juan Albarracín.** 2020. "Criminal Governance in the Time of covid-19". *Urban Violence Research Network*. June. <https://urbanviolence.org/criminal-governance-in-the-time-of-covid-19/>.
- Biondi, Karina.** 2018. *Proibido roubar na quebrada: território, hierarquia e lei no PCC*. Editora Terceiro Nome.
- Correa, R.** 2017 "Desarrollo socio-económico regional: impactos de la minería artesanal en el bajo Cauca antioqueño". *Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo*. 4 (1): 46-61.
- Correa-Cabrera, Guadalupe.** 2017. *Los Zetas Inc.: Criminal Corporations, Energy, and Civil War in Mexico*. University of Texas Press. Austin.
- Crisis Group International.** 2019. "Tranquilizar el Pacífico tormentoso: violencia y gobernanza en la costa de Colombia". *Informe sobre América Latina*. 76. 8 de agosto. Traducido del inglés.
- Cruz, Jose Miguel.** 2011. "Criminal Violence and Democratization in Central America: The Survival of the Violent State". *Latin American Politics and Society*. 53 (4):1-33.
- Defensoría del Pueblo.** 2017. *Grupos armados ilegales y nuevos escenarios de riesgo en el marco del posacuerdo*. Defensoría del Pueblo. Bogotá.
- . 2018. "Informe especial: economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo". Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones a los Derechos Humanos y el DIH Sistema de Alertas Tempranas (SAT). Septiembre, Bogotá.
- Duncan, Gustavo.** 2014. *Más que plata o plomo. El poder político del narcotráfico en Colombia y México*. Debate. Bogotá.

- Durán-Martínez, Angélica.** 2018. *The Politics of Drug Violence: Criminals, Cops, and Politicians in Colombia and Mexico*. Oxford University Press. Oxford.
- Feltran, Gabriel.** 2010. "Crime e castigo na cidade: os repertórios da justiça e a questão do homicídio nas periferias de São Paulo". *Caderno CRH*. 23 (58): 59-73.
- Flores-Macías, Gustavo.** 2014. "Financing Security Through Elite Taxation: The Case of Colombia's 'Democratic Security Taxes'". *Studies in Comparative International Development*. 49: 477-500.
- Fundación Ideas para la Paz.** 2018. "Las disidencias de las Farc, un problema en auge". <http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1662>. Consultado 5 de julio de 2018.
- , 2014. "Dinámicas del conflicto armado en el bajo Cauca antioqueño y su impacto humanitario". *Boletín*. 68. <http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/52efd828c4cbe.pdf>. Consultado 5 de julio de 2018.
- García, J.** 2018. *Re-configuraciones territoriales emergentes: hacia la consolidación de regiones étnicas. Estudio de caso bajo Cauca antioqueño, Colombia*. Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín). Medellín.
- García, Miguel.** 2007. "Sobre balas y votos: violencia política y participación electoral en Colombia, 1990-1994". En Diana Hoyos (ed.). *Entre la persistencia y el cambio. Reconfiguración del escenario partidista y electoral en Colombia*. Universidad del Rosario. Bogotá, pp. 84-17.
- Gibson, Edward L.** 2013. *Boundary Control: Subnational Authoritarianism in Federal Democracies*. Cambridge University Press.
- González, Fernán.** 2003. "Colapso parcial o presencia diferenciada del Estado en Colombia: una mirada desde la historia". *Colombia Internacional*. 54: 124-158.
- González, Fernán y Silvia Otero.** 2010. "La presencia diferenciada del Estado: un desafío a los conceptos de gobernabilidad y gobernanza". En Claire Launay y Fernán González (eds.). *Gobernanza y conflicto en Colombia: interacción entre gobernantes y gobernados en un contexto violento*. Cinep/Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.
- Gutiérrez Sanín, Francisco.** 2010. "Estados fallidos o conceptos fallidos: la clasificación de las fallas estatales y sus problemas". *Revista de Estudios Sociales*. 37: 87-104.
- Gutiérrez Sanín, Francisco, M. Marín, D. Machuca, M. Parada y H. Rojas.** 2020. "Paz sin garantías: el asesinato de líderes de restitución y sustitución de cultivos de uso ilícito en Colombia". *Estudios Socio-jurídicos*. 22 (2): 1-58.
- Idrobo, N., D. Mejía y A. M. Tribín.** 2014. "Illegal gold mining and violence in Colombia". *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*. 20: 83-111.
- Lessing, Benjamin.** 2020. "Conceptualizing Criminal Governance". *Perspectives on Politics*: 1-20. doi:10.1017/S1537592720001243
- Levitsky, Steven y Lucan A. Way.** 2010. *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War*. Cambridge University Press.
- Ley, Sandra.** 2017. "To vote or not to vote: How criminal violence shapes electoral participation". *Journal of Conflict Resolution*. 62 (9): 1963-1990.
- López, Claudia N.** 2010. *Y refundaron la patria: de cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano*. Debate-Random House. Bogotá.
- López, D.** 2008. "Palma aceitera [1] en los territorios de las comunidades negras del Pacífico surcolombiano". *Semillas*. <https://www.semillas.org.co/es/revista/palma-aceitera-1-en-los-territorios-de-las-comunidades-negras-del-pacifico-surcolombiano>
- Mampilly, Zachariah C.** 2011. *Rebel rulers: Insurgent governance and civilian life during war*. Cornell University Press.
- Misión de Observación Electoral, Universidad del Cauca.** 2010. *Mapas de riesgo electoral 2010 - Cauca*. Primera Edición, marzo 2010.

----- . 2010. *La dinámica electoral en el norte del Cauca. Análisis de 11 municipios*. Segunda edición, octubre 2012.

Montoya, L. 2015. *Análisis historiográfico de los conflictos socio-ambientales en la minería de El Bagre en las décadas del 70 al 90 del siglo XX y su influencia en el desarrollo de Antioquia*. Facultad de Minas, Departamento de Geociencia y Medio Ambiente. Universidad Nacional de Colombia. Medellín.

Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración. 2011. "Caracterización del departamento de Nariño". Bogotá, febrero.

OCDE. 2016. "Debida diligencia en la cadena de suministros de oro colombiana. Minería aurífera en Antioquia".

Pares. 2018. "El limbo en el que vive el bajo Cauca". <https://pares.com.co/2018/03/21/el-limbo-en-el-que-vive-el-bajo-cauca/>

----- . 2019. "Tumaco territorio de caciques, sin cacique". En *SIPARES, Elecciones 2019*.

Prem, Mounu, Andrés Rivera, Darío Romero y Juan F. Vargas. 2018. "Killing Social Leader for Territorial Control: The Unintended Consequences of Peace". *LA-CEA Working Paper Series 0019*.

Rasmussen, Sabina e Inge Helena Valencia. 2018. "Gobernanza en el Pacífico sur. Entre las rentas ilegales, el recrudecimiento de la violencia y la implementación escasa de los programas de desarrollo con enfoque territorial". *Análisis. 2/2018*. Friedrich-Ebert-Stiftung. Bogotá.

Robinson, James A. 2013. "Colombia: Another 100 Years of Solitude?". *Current History*. 112 (751): 43-48.

Rosero, Édgar. 2012. "Continuidades y discontinuidades del clientelismo y del familismo en la forma de hacer política en Tumaco (Colombia)". *Sociedad y Economía*. 22: pp. 231-260.

Rozo Ángel, Valentina y Patrick Ball. 2020. *Asesinatos de líderes sociales en Colombia: una estimación del universo – Actualización 2018*. Human Rights Analysis Group/Dejusticia.

Salas Salazar, Luis Gabriel, Jonas Wolff y Fabián Eduardo Camelo. 2019. "Towards violent peace? Territorial dynamics of violence in Tumaco (Colombia) before and after the demobilisation of the Farc-EP". *Conflict, Security & Development*. 19 (5): 497-520.

Silva Laura e Inge Helena Valencia. 2018. "Entre subsistencias y neoextractivismos locales. Dinámicas mineras en el norte del Cauca, Colombia". *Estudios Políticos*. 52: 172-193.

Snyder, Richard y Angélica Durán-Martínez. 2009. "Does Illegality Breed Violence? Drug Tracking and State-sponsored Protection Rackets". *Crime, Law and Social Change*. 52 (3): 253-273.

Staniland, Paul. 2012. "States, Insurgents, and War-time Political Orders". *Perspectives on Politics*. 10 (2): 243-264.

Tello, Esteban e Inge Helena Valencia. 2016. "La minería ilegal en Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao". Documento inédito. Proyecto Dinámicas territoriales de la minería en el posconflicto. Universidad ICESI.

Trejo, Guillermo y Sandra Ley. 2020. *Votes, Drugs, and Violence: The Political Logic of Criminal Wars in Mexico*. Cambridge University Press. New York.

Trejo, Guillermo, Juan Albarracín y Lucía Tiscornia. 2018. "Breaking State Impunity in Post-Authoritarian Regimes. Why Transitional Justice Mechanisms Deter Criminal Violence in New Democracies". *Journal of Peace Research*. 55 (6): 787-780.

Vélez, I., D. Varela, S. Rátivam y A. Salcedo. 2013. "Agroindustria y extractivismo en el alto Cauca. Impactos sobre los sistemas de subsistencia afro-campesinos y resistencias (1950-2011)". *CS* (12): 159-187.

Willis, Graham Denyer. 2015. *The Killing Consensus: Police, Organized Crime, and the Regulation of Life and Death in Urban Brazil*. University of California Press. Oakland, California.

PRENSA

Caracol Radio. 2019. "Quedó en libertad el alcalde de El Bagre, Ángel Mesa Castro". https://caracol.com.co/emisora/2019/10/24/medellin/1571934625_516629.html

Contagioradio. 2019. "Tumaco: sin gobierno, sin agua y con mucha violencia". 17 de abril. <https://www.contagioradio.com/tumaco-gobierno-agua-violencia/>

El Colombiano. 2015. "Candidato a la alcaldía de Cauca es investigado por asesinato". <https://www.elcolombiano.com/colombia/politica/candidato-a-la-alcaldia-de-caucasia-es-investigado-por-asesinato-CL2937062>

El Espectador. 2015. "A pocos días de elecciones surgen nuevas acusaciones sobre candidatos". <https://www.elespectador.com/noticias/politica/a-pocos-dias-de-elecciones-surgen-nuevas-acusaciones-sobre-candidatos/>

El Tiempo. 2019. "Capturan al 'zar del oro', líder de minería ilegal en el bajo Cauca". <https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/capturan-al-zar-del-oro-que-derivaba-mineria-ilegal-en-bajo-cauca-antioqueno-420476>

----- 2019a. "La odisea de hacer política en medio del fuego cruzado en Antioquia". <https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/riesgo-en-el-bajo-cauca-antioqueno-para-candidatos-410822>

Elbajocauca.com. 2017. "Los exalcaldes del bajo Cauca, deudores de la parapolítica". <http://www.bajocauca.com/los-exalcaldes-del-bajo-cauca-deudores-de-lapara-pol%C3%ADtica.aspx>

Especial Noticias Caracol. 2019. "Colombia Negra, Tumaco". 24 de agosto. <https://www.youtube.com/watch?v=6lNYgt5anlA>

La Silla Vacía. 2019. "Dos exalcaldes con fantasmas paramilitares vuelven al ruedo". <https://lasillavacia.com/silla-paisa/dos-exalcaldes-fantasmas-paramilitares-vuelven-al-ruedo-72315>

Noticias UNO. 2018. "Prisión para alcalde de Cáceres, Antioquia por presuntos nexos con 'Clan del Golfo'". <https://noticias.canal1.com.co/nacional/prision-para-alcalde-de-caceres-antioquia-por-presuntos-nexos-con-clan-del-golfo/>

RCN Radio. 2018. "Exalcalde de Cauca, recapturado por celebración indebida de contratos". <https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/excalde-de-cauca-recapturado-por-celebracion-indebida-de-contratos>

Verdadabierta. 2008. "'Cuco Vanoy', Ramiro Vanoy". <https://verdadabierta.com/perfil-de-ramiro-vanoy-alias-cuco-vanoy/>

----- 2014. "Las Farc, detrás de la tierra y el oro en El Bagre, bajo Cauca antioqueño". <https://verdadabierta.com/guerrilla-de-las-farc-buscan-tierras-y-oro-en-bajo-cauca/>

ACERCA DE LOS AUTORES Y LAS AUTORAS

Juan Guillermo Albarracín. Politólogo con opción (Nebenfach) en economía y M. A. en política comparada por la Eberhard-Karls Universität Tübingen (Alemania), así como M. A. y PhD en ciencia política por la University of Notre Dame (Estados Unidos). Director del Programa de Ciencia Política y profesor asistente del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad ICESI (Cali).

Juan Pablo Milanese. PhD en ciencias política y sociales y MA en relaciones internacionales por la Universidad de Bolonia. MSc en ciencias y sistema de información geográfica por la Universidad de Salzburgo. Licenciado en ciencia política por la Universidad de Buenos Aires. Jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad ICESI.

Margarita Navarro De Arco. Antropóloga por la Universidad del Magdalena, estudiante de la maestría en estudios sociales y políticos de la Universidad ICESI. Como investigadora ha trabajado en diversas áreas de la antropología y las ciencias de la educación. Actualmente trabaja las líneas de investigación de movimientos sociales, cambios institucionales y partidos políticos.

SOBRE ESTE PROYECTO

Presente en el país desde 1979, la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol) busca promover el análisis y el debate sobre políticas públicas, apoyar procesos de aprendizaje e intercambio con experiencias internacionales y dar visibilidad y reconocimiento a los esfuerzos en la construcción de paz.

Como fundación socialdemócrata, nos guían los valores de la libertad, la justicia y la solidaridad. Mediante nuestras actividades temáticas, ofrecemos un espacio de re-

Inge Helena Valencia. Phd en Antropología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) Francia. Jefa del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad ICESI.

Jonas Wolff. Politólogo con doctorado (Dr. phil.) por la Universidad de Frankfurt y venia legendi (Habilitation) por la Universidad de Kassel. Miembro de la junta directiva y director del departamento de investigación "Conflictos intraestatales" del Peace Research Institute Frankfurt (PRIF) y miembro de la junta directiva del Instituto Colombo-Alemania para la Paz (CAPAZ).

PIE DE IMPRENTA

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
Calle 71 n° 11-90 | Bogotá-Colombia

Responsable

Kristina Birke Daniels

Directora del Proyecto Regional de Seguridad
y representante de la FES Colombia

Saruy Tolosa

Coordinador de proyectos

saruy.tolosa@fescol.org.co

Bogotá, noviembre de 2020

flexión y análisis de la realidad nacional, promoviendo el trabajo en equipo y las alianzas institucionales con universidades, centros de pensamiento, medios de comunicación, organizaciones sociales y políticos progresistas. En el marco de estos esfuerzos desarrollamos grupos de trabajo con expertos (académicos y técnicos) y políticos, así como foros, seminarios y debates. Además, publicamos *policy papers*, análisis temáticos y libros.

Para más información, consulte

<https://www.fes-colombia.org>

El uso comercial de los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) está prohibido sin autorización previa escrita de la FES.

LA LÓGICA POLÍTICA DE LOS ASESINATOS DE LÍDERES SOCIALES



El alarmante número de líderes sociales asesinados en el posacuerdo ha generado la exigencia de líderes sociales, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y organizaciones internacionales al Estado de mecanismos de protección más efectivos.

Tanto el gobierno como los medios de comunicación han asociado la violencia contra líderes sociales con la presencia de economías ilegales y grupos armados no estatales en las periferias del país. Es decir, este es un problema resultante de la presencia estatal precaria en la periferia.

En este documento mostramos que la violencia ejercida contra líderes y lideresas sociales no solo es el resultado de la presencia de grupos criminales y economías ilegales en el territorio: sigue también una lógica política de acuerdo con la cual actores políticos locales delegan en grupos armados ilegales –muchas veces íntimamente relacionados con ellos– el uso de la violencia contra rivales políticos y líderes sociales que amenazan con desarticular formas de autoritarismo competitivo local.



A partir de un análisis estadístico mostramos cómo los asesinatos de líderes sociales no solo ocurren en los municipios con “más coca” o con la presencia de grupos armados no estatales. También son más probables en municipios donde hay indicios de formas de autoritarismo local: menor participación en las elecciones y más concentración de votos en pocos partidos. En particular, se estima que hay más violencia en los lugares donde fuerzas alternativas, en particular partidos de izquierda, representan una “amenaza creíble” a los órdenes políticos locales establecidos.